

Cambios en las prácticas políticas del empresariado mexicano. Breve esbozo histórico desde la posrevolución hasta la actualidad.

Changes in the political practices of the Mexican business community. Brief historical sketch from the post-revolution to the present.

Cuitláhuac Alfonso Galaviz Miranda⁶

Resumen

El artículo expone un breve repaso histórico de los cambios en las prácticas políticas empresariales en México; el periodo de estudio abarca desde la época de la posrevolución hasta la actualidad. Como se verá, estos cambios apuntan, en términos generales, hacia una mayor diversificación y ampliación de las acciones políticas empresariales, lo cual dio como resultado una intervención más directa de los empresarios en la administración pública del país. El artículo muestra los procesos mediante los cuales el empresariado mexicano pasó de ser un actor con poca participación en la vida política nacional a ser decisivo en las políticas públicas del país.

Palabras clave:

Empresarios, prácticas políticas, México, políticas públicas, intervención directa.

Abstract

The article presents a brief historical review of businessmen's policy practices in Mexico; the study's period starts from the post-revolution period and finish in the present context. As will be seen, these changes point, in general, towards a greater diversification and expansion of business political actions, which resulted in a more direct intervention of businessmen in the country's public administration. The article shows the processes

⁶ Doctorante en Estudios del Desarrollo. Problemas y perspectivas latinoamericanas por el Instituto Mora (México). Maestro en Sociología política por la misma institución y Licenciado en Historia por la Universidad de Sonora. Correo electrónico: cuitlahuacgalaviz@hotmail.com

through which the Mexican business community went from being an actor with little participation in national political life to being decisive in the country's public policies.

Keywords

Businessmen, political practices, Mexico, public policies, direct intervention.

Introducción

El objetivo de este artículo es analizar los cambios en las prácticas políticas del empresariado mexicano. El periodo elegido va desde las primeras décadas del siglo XX, después de que la Revolución mexicana transformó las principales relaciones entre los distintos grupos sociales del país (incluido el sector privado y el gobierno), hasta la actualidad. Como trataré de mostrar, mantengo que dichos cambios apuntan en dos direcciones; por un lado, a una diversificación del tipo de prácticas políticas de los empresarios; por el otro, a una incidencia más directa en la administración pública mexicana.

El texto se compone de tres secciones. En un primer momento, me enfoco en las relaciones entre empresarios y gobiernos a partir de la instauración del régimen posrevolucionario. En segundo lugar, analizo los cambios que surgieron durante la segunda mitad del siglo XX y que apuntan hacia una mayor politización del empresariado. En la tercera sección presento las variantes generadas por la “apertura democrática” de finales del siglo XX hasta nuestros días. Este recorrido histórico muestra las condiciones políticas que hicieron posible que los empresarios pasaran de ser un actor poco inmiscuido en la política nacional a su incorporación de lleno.

Antes de terminar esta introducción, es importante hacer una aclaración: como estrategia para la presentación de la información, describiré lo que considero las principales coyunturas sobre las acciones políticas de los empresarios en México. Ello lleva necesariamente a dejar algunas lagunas en términos temporales entre un evento de ruptura o altamente significativo y otro. Un estudio con mayor detenimiento difícilmente podría obviar los matices y las etapas internas dentro de estos grandes periodos históricos.

Los empresarios mexicanos en la primera mitad del siglo XX

El evento más importante en el México de principios del siglo XX fue la Revolución mexicana, la cual terminó por reestructurar el sistema político institucional, la delegación de poder y la toma de decisiones públicas del país. Según Carlos Alba Vega, la Revolución supuso una relación particular entre empresarios y gobiernos: el nuevo orden posrevolucionario “arropó [a los empresarios] para que crecieran como clase social” (Alba, 2006: 124) y, por su parte, los empresarios se abstuvieron de participar directamente en la política institucional. Alba Vega (2006: 124) habla de un “acuerdo tácito” y de una relación de “simbiosis” entre ambos.

En otro de sus textos, el autor plantea que ello significó un cambio respecto al modo de hacer política durante el siglo XIX cuando, a menudo, quienes ocupaban los cargos públicos podrían ser también “hombres de negocios de diversos tipos” (Alba, 2001: 212).⁷ Para el autor, después de la Revolución era más frecuente que los políticos se convirtieran en empresarios y no que éstos buscaran puestos públicos (Alba, 2001: 212).

Los gobiernos posrevolucionarios impulsaron la creación de organizaciones que aglutinaron diferentes sectores sociales y que, al mismo tiempo, mantuvieron relación cercana —casi orgánica— con el régimen. El sector privado no fue la excepción. En términos organizacionales, la relación entre empresarios y el Estado mexicano de la época se formalizó con el establecimiento de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) en 1917 y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) un año después. Estas agrupaciones relevaron a antiguas organizaciones porfiristas⁸ y fueron promovidas desde el Estado con el objetivo de institucionalizar sus relaciones con comerciantes y empresarios industriales. En ese momento, tanto la CONCANACO como la CONCAMIN eran de afiliación obligatoria y presentaban poca autonomía con respecto al

⁷ Por ejemplo, tenemos los casos de Santiago Vidaurri como gobernador de Nuevo León y Luis Terrazas de Chihuahua.

⁸ Quizá el ejemplo más significativo de éstas sea la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, fundada en 1874.

Estado. Ello se tradujo en pocas posibilidades de intervención en la administración pública (Alba, 2006: 126).

Sin embargo, estas organizaciones no cumplieron de lleno con los intereses de todos los sectores empresariales; poco más de diez años después de su creación (1929), empresarios de Monterrey —el grupo empresarial más afianzado para la época— impulsaron la creación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Dicha organización fue instaurada con la intención de convertirse en un sindicato patronal de fuerza autónoma e independiente del Estado.

Así, en el periodo posterior a la Revolución mexicana, los empresarios tuvieron un papel distante de las decisiones públicas en un ambiente que les favorecía; no obstante, la creación de la COPARMEX muestra sus intenciones de agruparse para defender sus intereses si fuera necesario (como sucedió a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando el régimen priísta estaba en decadencia).

Las primeras tensiones importantes entre empresarios y el Estado mexicano en el periodo posrevolucionario sucedieron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Las razones fueron varias; por ejemplo, muchos empresarios no vieron con buenos ojos los proyectos obreros y campesinos impulsados desde la administración cardenista. Además, en la presidencia del general Cárdenas, se expidió la Ley de expropiación, la cual señala que el Estado puede proceder a “la ocupación temporal, ya sea total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio [de bienes privados] para los fines del Estado o en interés de la colectividad”.⁹ Con base en esta reforma constitucional, el Estado podía expropiar las riquezas empresariales si, desde su interpretación, era necesario o en beneficio del bien público. Otra reforma importante durante el gobierno de Cárdenas fue la Reforma agraria, la cual permitió que tierras en manos de empresas fueran expropiadas en beneficio de comunidades empobrecidas durante décadas de violencia y despojos.

Con este tipo de medidas se instituyó mayor capacidad de intervención gubernamental en los asuntos económicos y aumentaron las tensiones con el sector

⁹ “Ley de expropiación. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936”. Portal en línea de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/35.pdf>

privado. Por ejemplo, la COPARMEX fue una opositora a las medidas cardenistas como la Reforma agraria. Como se ve, durante el cardenismo el pacto entre empresarios y el régimen posrevolucionario tuvo sus primeras fricciones.

Con el relevo de Manuel Ávila Camacho en la presidencia del país (1940-1946), las tensiones disminuyeron. El gobierno de Ávila Camacho se caracterizó, entre otros aspectos, por un decidido impulso al desarrollo económico del país; los empresarios jugaron un papel fundamental en dicho proceso y, en consecuencia, volvieron a acercarse políticamente al gobierno (Valdés, 1997: 124). Además, el gobierno de Ávila Camacho dio marcha atrás a muchas de las políticas progresistas del cardenismo, lo cual creó un ambiente favorable para que las relaciones entre los empresarios y el gobierno mejoraran.

En esta breve revisión del periodo que va desde la instauración del régimen posrevolucionario hasta el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se destacan los siguientes elementos: durante el periodo posterior a la Revolución existió un pacto de apoyo mutuo entre empresarios y el gobierno. El acuerdo básicamente establecía apoyo gubernamental a las actividades e inversiones empresariales, a cambio de que los hombres de negocios se abstuvieran de participar en la política institucional. Esta relación se formalizó con la creación de organismos empresariales como la CONCANACO y la CONCAMIN, de carácter oficialista y afiliación obligatoria. No obstante, el proyecto político de Lázaro Cárdenas, de tendencia hacia los sectores populares, causó las primeras fricciones significativas entre ambas partes. Con la presidencia de Manuel Ávila Camacho, el gobierno tuvo como uno de sus principales objetivos impulsar el desarrollo económico nacional y, para ello, se acercó a los sectores empresariales. En general, los empresarios se mostraban conformes con la estabilidad política que consiguió el régimen posrevolucionario, pero había tensiones cuando el Estado buscaba intervenir en los asuntos económicos.

Segunda mitad del siglo XX: la politización del empresariado mexicano

Al iniciar la segunda mitad del siglo XX, el régimen posrevolucionario se encontraba ya bastante asentado. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) era un partido de Estado que dominaba la política nacional. Amplios sectores de la sociedad mexicana se

encontraban aglutinados en torno a organizaciones creadas por el régimen, lo cual le aseguraba mayor control y coordinación política y social. De manera conjunta, los años cincuenta y sesenta —en concordancia con el contexto mundial— se caracterizaron por un importante crecimiento económico y una ampliación de la cobertura en servicios básicos sin precedentes.

En 1960, durante la presidencia de Adolfo López Mateos, hubo otro periodo de tensiones entre empresarios y el gobierno mexicano. En ese momento, diferentes grupos de empresarios criticaban el desenvolvimiento económico del país; sobre todo, se opusieron a lo que consideraban un gobierno de izquierda¹⁰ que ampliaba su participación en la esfera económica. Tal argumento se sostenía en acciones como la nacionalización de la industria eléctrica realizada en 1960 y la relación cercana con el gobierno revolucionario en Cuba. En ese contexto, apareció un desplegado público titulado “¿Por cuál camino, señor presidente?”, en el cual se lee que

De acuerdo con nuestro régimen de Derecho, la Economía de México está basada en el respeto a la propiedad privada, la cual tiene una función social y es el fundamento de las demás libertades individuales. Este respeto a la propiedad privada se traduce en un régimen económico de libre empresa y de responsabilidad pública. Diversas operaciones realizadas recientemente por el Gobierno Federal, adquiriendo negocios privados (operaciones que en algunos casos están plenamente justificadas desde el punto de vista político), han suscitado serias dudas acerca de si existe una orientación distinta en la actual política económica del Gobierno. [...] ¿Es que nos encaminamos, a través de un intervencionismo creciente, hacia el socialismo de Estado?¹¹

Es interesante destacar que el desplegado fue firmado por la COPARMEX y las organizaciones oficialistas CONCANACO y la CONCAMIN (Alba, 2001: 217; Valdés, 1997:

¹⁰ Cabe recordar que el mismo López Mateos declaró: “mi gobierno es, dentro de la constitución, de extrema izquierda”. Nota periodística aparecida en el periódico *Excélsior* el 2 de julio de 1960, citado en (Alba, 2001: 219).

¹¹ CONCANACO, CONCAMIN y COPARMEX, “¿Por cuál camino, Señor Presidente?”, *Excélsior*, 24 de noviembre de 1960.

144), con lo cual se puede apreciar una creciente independencia de los organismos empresariales creados por el Estado mexicano durante la inmediata posrevolución.

Con todo, estas fricciones fueron más bien coyunturales. Las relaciones entre los empresarios y el gobierno fueron, en general, buenas y estables mientras el crecimiento económico de los años cincuenta y sesenta también lo fue (Valdés, 1997: 146 y 147). En palabras de Carlos Arriola, “los temores que suscitó la política de reformas y de defensa de la revolución cubana que llevó a cabo el presidente López Mateos, se disiparon rápidamente y no se alteró el acuerdo tácito, pero estrecho, existente entre el grupo gobernante y los empresarios acerca de la estrategia global de desarrollo” (Arriola, 1988: 41).

A finales de los años sesenta y durante los setenta, el modelo de desarrollo impulsado desde el Estado tuvo sus primeras crisis importantes. Durante la presidencia de Luis Echeverría (1970-1976), las relaciones del gobierno con los empresarios fueron especialmente tensas; esta fue la primera gran coyuntura que dio pie a la posterior intervención directa de los empresarios en la política institucional y partidista. Algunas de las políticas públicas de esos años que crearon conflictos fueron, por ejemplo, la simpatía con el gobierno de Salvador Allende en Chile y la expropiación de tierras en el Valle del Yaqui (Flores, 2003: 506), una zona agrícola especialmente fértil ubicada en el estado de Sonora. Sin duda, las relaciones también empeoraron a raíz del intento de secuestro y asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, ocurrido el 17 de septiembre de 1973 a cargo de un comando de la organización guerrillera Liga Comunista 23 de septiembre (Flores, 2003: 506; Arriola, 1988: 101 y 102; Valdés, 1997:187).

Garza Sada era probablemente el hombre más respetado del empresariado mexicano de ese momento y su asesinato fue uno de los momentos más tensos en la historia de las relaciones del sector privado y el gobierno en México. El presidente Luis Echeverría estuvo presente en sus servicios funerarios; ahí, Ricardo Margáin Zozaya (director de varias empresas propiedad de Garza Sada) pronunció un duro discurso en presencia del presidente:

Que sus asesinos y quienes armaron sus manos y envenenaron sus mentes merecen el más enérgico de los castigos, es una verdad irrefutable. Pero no es esto lo que

preocupa a nuestra ciudad. Lo que alarma no es tan sólo lo que hicieron, sino por qué pudieron hacerlo. La respuesta es muy sencilla, aunque a la vez amarga y dolorosa: sólo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad, cuando el Estado deja de mantener el orden público, [...] cuando se ha propiciado desde el poder, a base de declaraciones y discursos, el ataque reiterado al sector privado.¹²

En este ambiente de la más alta tensión política, los principales empresarios del país “se enfrentaron airadamente al presidente Echeverría y fundaron el Concejo Coordinador Empresarial (CCE)” (Puga, 2012: 155). El objetivo del concejo fue, al decir de sus creadores, aglutinar en un frente único los intereses dispersos del empresariado (Alba, 2001: 224). Así, es importante hacer hincapié en que dicho concejo surgió como acción defensiva, como una respuesta organizada del sector empresarial ante un escenario donde, desde su perspectiva, el gobierno no favorecía las actividades económicas privadas. En la opinión de Anselmo Flores, “de ahí en adelante [los empresarios] no sólo señalarían errores en las políticas públicas, sino que también propondrían una alternativa de desarrollo diferente a la propuesta por el gobierno” (Flores, 2003: 506). Como se verá más adelante, años después el CCE tendrá un papel decisivo en la vida pública del país y representantes del sector privado ocuparán directamente algunos cargos públicos, incluso la presidencia del país.

En 1976, José López Portillo tomó posesión como presidente del país y buscó mejorar las relaciones del gobierno con el empresariado. En 1977 impulsó una Reforma política que permitió la incorporación al sistema institucional de grupos políticos excluidos (el Partido Comunista Mexicano, por ejemplo, obtuvo su registro gracias a esta reforma) y pretendió canalizar el creciente descontento social por medios institucionales. Esta fue la primera reforma significativa del sistema político nacional desde la creación del régimen posrevolucionario.

¹² “Discurso De Ricardo Margáin Zozaya en el sepelio de Eugenio Garza Sada”, Centro Eugenio Garza Sada. Disponible en: <https://soundcloud.com/cegsmx/discurso-de-ricardo-margain-zozaya-en-el-sepelio-de-eugenio-garza-sada>

López Portillo también tomó decisiones encaminadas a mejorar las relaciones con el sector privado, las cuales fueron muy difíciles durante el sexenio anterior. Así, se tomaron medidas como el control del gasto público (con lo cual el estado reguló y disminuyó su participación en la economía) y se fijaron topes salariales. Con ello, “el empresariado reanudó su colaboración en el crecimiento gracias a que la política económica le devolvió seguridad a su inversión, pero [...] no dejó nunca, ni siquiera cuando la recuperación fue exitosa, de presionar al gobierno para obtener más espacios de participación política” (Hernández, 1990: 740).

Los primeros cuatro años de este sexenio (1976-1980) fueron de buenas relaciones entre empresarios y el gobierno. Sin embargo, ante la gran crisis económica por los precios del petróleo de 1981, López Portillo decidió nacionalizar la banca. Tal medida gubernamental revivió las inquietudes de los empresarios que veían afectados sus intereses con la intervención del gobierno en los asuntos económicos. En palabras de Matilde Luna, la expresión más evidente del descontento fue “la iniciación del empresariado, ya no en las fronteras de la política como fuera el caso de la creación del Concejo Coordinador Empresarial, sino en el terreno mismo de la política partidista y electoral” (Luna, 1990: 108). Así, este fue el momento de ruptura definitiva del pacto posrevolucionario entre empresarios y gobierno.

Con la llegada a la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) hubo un cambio en el modelo económico nacional: se comenzaron a aplicar medidas neoliberales de apertura económica y liberalización de los mercados; en consecuencia, las relaciones entre empresarios y el gobierno mejoró (Luna, 1990: 114). Tanto empresarios como el gobierno tuvieron un discurso similar sobre el origen de la crisis económica del periodo anterior: la intervención gubernamental en la economía nacional. Sin embargo, el gobierno mantuvo la intención de ser el principal agente político durante el cambio de modelo económico, lo cual no fue bien visto por una parte del empresariado —sobre todo, los más radicales en sus exigencias de una sociedad de mercado— (Luna, 1990: 119-125).

Los gobiernos de Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) continuaron y profundizaron el modelo neoliberal; durante sus administraciones se redujo

la participación gubernamental en la economía mediante empresas estatales para dar espacio a las inversiones privadas, lo cual —en general— fue bien visto por el sector empresarial.

Además, durante este periodo hubo un proceso de cierta apertura en el sistema político nacional. En el régimen instaurado en el periodo posrevolucionario, el PRI gobernaba prácticamente sin oposición que realmente pudiera competirle por el control político del país. El autoritarismo priísta se mostraba asfixiante, pero, a la vez, en decadencia. A finales de los setenta inició un proceso de consolidación de mecanismos e instituciones de democracia liberal que disminuyó la presión política opositora generada por el autoritarismo y la represión del régimen priísta. La reforma política de 1977 es un ejemplo de ello.

En México, a diferencia de otros casos, la apertura democrática de la segunda mitad del siglo XX no estuvo marcada por una ruptura clara con el autoritarismo, como una revolución o una movilización social generalizada; se trató, más bien, de “una disolución paulatina de un régimen autoritario” (Labastida y López, 2004: 750). Según Labastida y López (2004), hubo una serie de negociaciones y ajustes entre los distintos actores del sistema político mexicano; los autores denominan conceptualmente el proceso como una “transición prolongada”. En consecuencia, algunos grupos críticos u opositores (no todos) encontraron mecanismos institucionales para canalizar sus demandas.

Los empresarios siguieron en la línea de mantener influencia en el diseño e implementación de las políticas públicas nacionales. De hecho, en 1987 se realizó el Primer Congreso Nacional de Empresarios, en el cual se propuso impulsar una “modernización integral que eliminara la intervención excesiva del gobierno en todos los ámbitos” (Luna, 1990: 131). Además, aumentó la actividad empresarial directa en la política institucional. En ese sentido, destacó la participación de empresarios como candidatos en elecciones por el derechista Partido Acción Nacional (PAN). En 1988 el empresario sinaloense Manuel J. Clouthier (quien había sido presidente de la COPARMEX) fue candidato a la presidencia del país por el PAN. Además, las victorias electorales crecieron en contextos locales (presidencias municipales y diputaciones locales). Posteriormente, se extendieron a

diputaciones federales, senadurías, gobiernos estatales y, como corolario, tenemos el triunfo de Vicente Fox, empresario agrícola y ex presidente del grupo Coca-Cola para la región de Latinoamérica, en la elección presidencial del año 2000.

Para terminar con el apartado, hubo un cambio principal respecto a la participación política empresarial en la segunda mitad del siglo XX: el desconocimiento del pacto posrevolucionario de no participación directa de los empresarios en la política electoral e institucional, a cambio de apoyo gubernamental para la realización de actividades económicas privadas. El caso más importante en este proceso fue la llegada a la presidencia del país de Vicente Fox en el año 2000. Con ello, se hizo evidente una reinterpretación de la función y los límites de los empresarios (a título personal o por medio de sus organizaciones) en la política nacional.

Principios del siglo XXI: los empresarios ante la alternancia y el reajuste de fuerzas en el sistema político mexicano

Para principios del siglo XXI, la injerencia de grupos empresariales en la elección de gobernantes era ya muy evidente (Sosa y López, 2013: 167). La llamada “apertura democrática” de finales de siglo (hasta ese momento, el cambio más significativo del sistema político institucional mexicano) trajo consigo nuevas posibilidades de participación diferentes a las del presidencialismo priísta de la mayor parte del siglo XX. Es decir, en ese reacomodo general que supuso la “apertura democrática”, la relación entre empresarios y el gobierno también cambió.

Es importante poner atención en un evento realizado poco antes de comenzar el siglo XXI: las elecciones federales de 1997. En ese momento se renovó la totalidad de la cámara de diputados y, por primera vez desde el periodo posrevolucionario, el PRI perdió la mayoría absoluta. De esta manera, se presentó un escenario en el que el Congreso se convirtió en un verdadero espacio de negociación política. Los empresarios, acostumbrados a mediar directamente con el ejecutivo y sus representantes, encontraron en los legisladores nuevos actores políticos que podían ayudarlos a conseguir sus intereses. Por lo tanto, el panorama de posibles interlocutores con quien negociar se pluralizó (aunque eso

no significó que dejaran de cabildear con la presidencia). Los empresarios, ante la irrupción del Congreso como poder real, diversificaron sus formas de actuación de una manera no necesariamente excluyente entre ellas (Alba, 2006: 137; Puga, 2012: 180).

La alternancia en el poder ejecutivo del año 2000 abrió otra posibilidad de actuación política empresarial: las Secretarías de Estado. Una parte del primer gabinete del gobierno de Vicente Fox estuvo compuesta por empresarios o por altos funcionarios de grandes empresas. Por ejemplo, el cargo de Secretario de Economía fue ocupado por Fernando Canales Clariónd, empresario regiomontano y exgobernador de su estado; Javier Usabiaga Arroyo, empresario agrícola originario de Guanajuato, ocupó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Pesqueros y Medio Ambiente; durante el último año de la administración encabezada por Vicente Fox, el estratégico puesto de Secretario de Gobernación fue ocupado por un expresidente de la COPARMEX: Carlos Abascal. Así, estos hombres de negocios no sólo se ocuparon de participar en elecciones, poco a poco también se fue volviendo habitual que ocuparan cargos públicos por designación.

Ahora me detendré en lo que considero uno de los momentos más destacados en cuanto a la participación política del empresariado mexicano: la elección presidencial de 2006. En estos comicios la disputa se dio sobre todo entre el candidato del PAN, Felipe Calderón, y el abanderado de la Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT y el entonces Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano) Andrés Manuel López Obrador (el actual presidente de México).¹³ Según las instancias oficiales, el ganador fue el abanderado panista por una diferencia de aproximadamente medio punto porcentual. Por su parte, López Obrador no reconoció los resultados y se proclamó ganador. Así, este ha sido uno de los momentos de mayor confrontación y polarización en la historia reciente de nuestro país y los empresarios jugaron un papel fundamental (Flores, 2006; Schedler, 2008), sobre todo, por la labor realizada por uno de los apéndices organizativos del Concejo Coordinador Empresarial: su Concejo de la Comunicación (CC).

¹³ De manera interesante, el PRI y su candidato Roberto Madrazo fueron, por primera vez, relegados al tercer lugar como protagonista de la contienda.

Antes de la elección, este organismo, el cual se auto presenta como “la voz de las empresas”, lanzó una campaña publicitaria denominada “voto” con el objetivo, según se argumentó desde el propio CC, de “sensibilizar a la población en primer lugar a ejercer su derecho al voto el 2 de julio de 2006, y en segundo lugar a ejercerlo de manera responsable y razonada” (Sosa, 2010: 89). Aunque era evidente la intención de influir directamente en el resultado de las elecciones.

Sobresalieron los *spots* de radio y televisión pagados por el CC, los cuales se dedicaron a atacar sistemáticamente al candidato de izquierda López Obrador, quien fue considerado por el empresariado como un adversario político. Así, por ejemplo, “se hacía el exhorto a la ciudadanía para que no respaldaran un cambio en el modelo económico del país. Si bien en los mensajes emitidos no se mencionaba a algún candidato en particular, era clara la referencia a López Obrador, el único que había propuesto modificarlo” (Sosa, 2010: 93). Además, la campaña del CC fue muy similar a la del candidato del PAN, desde donde se aseguraba que López Obrador era “un peligro para México”. El candidato de izquierda inició la elección con varios puntos de ventaja sobre sus adversarios. Sin embargo, hacia el final de la contienda, su ventaja se redujo y las instituciones electorales dieron por ganador a su adversario, el derechista Felipe Calderón. Sin duda, los *spots* del CC tuvieron influencia en dicho proceso. Más allá de las evidentes repercusiones éticas de tal intervención, me interesa destacar que la elección presidencial de 2006 muestra el nivel de influencia que pueden llegar a tener los empresarios mexicanos en la política nacional.

Por otra parte, existen actores propios de este siglo por medio de los cuales los empresarios defienden sus intereses: los profesionales del cabildeo ante legisladores. Éstos son contratados por empresas con el objetivo de “monitorear y dar seguimiento al Poder Legislativo para obtener información y reaccionar a tiempo ante ciertas decisiones que consideren que puedan afectar al sector empresarial; o para anticiparse a los hechos y proponer leyes que juzguen convenientes a sus intereses” (Alba, 2006: 140). Así, los cabilderos son otra forma de influir en políticas públicas con la que cuentan los empresarios. Estos actores ofrecen a sus clientes la posibilidad de un contacto personalizado y directo con legisladores.

Los cabilderos regularmente son individuos que tienen estudios universitarios, el conocimiento técnico y la sensibilidad política para promover los intereses empresariales. Entre las empresas que cuentan con su equipo de cabilderos que establecen diálogo permanente con los legisladores tenemos a Cementos de México (CEMEX), la cervecera Grupo Modelo y el Grupo Televisa (especialista en medios de comunicación), así como las transnacionales Philips y Pfizer (Alba, 2006: 142). Más que casos especiales, esta forma de hacer política es ya una habitualidad del sistema mexicano en la que participan todos los partidos políticos.

Por otro lado, con las presidencias de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), hubo una continuidad del modelo neoliberal y desregulación estatal de los asuntos económicos, con lo cual los empresarios —en general— mantuvieron su nivel de influencia y presión política. Ambos gobiernos impulsaron modificaciones legales para que las inversiones privadas tuvieran una participación más directa en las decisiones y políticas públicas. Felipe Calderón publicó la Ley de Asociaciones Público-Privadas, la cual permite que las empresas privadas puedan participar en la construcción de infraestructura pública. Enrique Peña Nieto promulgó una Reforma Energética con la cual el sector energético nacional dejó de ser un monopolio gubernamental. La condonación de impuestos a grandes empresas con el objetivo de “impulsar la inversión”, fue otra característica común durante las presidencias de Calderón y Peña Nieto. Los grandes empresarios, por su parte, tuvieron un entorno político propicio para realizar sus negocios y mantuvieron buenas relaciones con estos gobiernos.¹⁴

En 2018 sucedió el último gran cambio en el sistema político nacional. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador (quien había sido candidato a presidente del país en 2006 y 2012) ganó las elecciones presidenciales y está llevando a cabo cambios en la forma de

¹⁴ En ese sentido, vale la pena mencionar los siguientes datos que son especialmente significativos: “mientras la economía mexicana sólo creció a una tasa de 2.6 por ciento entre 2004 y 2014, la riqueza se incrementó en 7.9 por ciento para esos mismos años y el 10 por ciento de las familias más ricas del país concentraron dos terceras partes de todos los activos físicos y financieros” (Quintana, 2016: 113).

hacer política a nivel nacional. Su gobierno se aut nombra la “Cuarta Transformación” de la vida pública del país.¹⁵

A mi parecer, la relación del presidente López Obrador con los empresarios ha estado llena de contrastes. Por un lado, hay representantes del sector privado que acusan al gobierno de no entenderlos.¹⁶ Por el otro, el gobierno impulsó la creación de un “Concejo Asesor de Empresarios” del que forman parte algunos de los empresarios más ricos del país y asesora a la presidencia en temas económicos; incluso, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, es un millonario empresario agroindustrial. Muchos episodios de la relación entre el primer gobierno mexicano de izquierda en décadas y los empresarios del país aún están por verse.

A manera de conclusión

Para este trabajo me propuse evidenciar el proceso de cambios en las prácticas políticas del empresariado mexicano desde la posrevolución hasta la actualidad. La coyuntura más importante se vivió en el sexenio de Luis Echeverría. Es cierto que, anteriormente, durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, hubo tensiones (a veces, no menores); sin embargo, es a partir de la presidencia de Echeverría que los empresarios comenzaron ya no sólo a criticar las acciones gubernamentales, sino también a proponer otras y, más adelante, aumentó su interés por ocupar cargos públicos donde pueden influir directamente en decisiones en materia de políticas públicas. A partir de los años setenta, el empresariado inició un proceso de mayor incorporación en la vida política nacional, el cual, lejos de detenerse, se ha fortalecido.

Sin embargo, es importante señalar algunos matices. En primer lugar, el sector empresarial del país es un tejido complejo y no un grupo homogéneo; en su interior existen diferentes proyectos e intereses. Además, en próximas investigaciones sería importante hacer las aclaraciones necesarias según las características de las distintas regiones del país.

¹⁵ Las tres anteriores serían la Independencia, la reforma del siglo XIX que separó Iglesia y Estado y la Revolución de principios del siglo XX.

¹⁶ Verónica Espinosa. “AMLO nos escucha, pero no nos entiende: Coparmex”, *Proceso*, 8 de mayo de 2019. Disponible en: <https://www.proceso.com.mx/583158/amlo-nos-escucha-pero-no-nos-entiende-coparmex>

Se puede concluir que el empresariado ha mostrado una actitud a la ofensiva cuando el gobierno ha querido participar más decididamente en los asuntos públicos, como es el caso del gobierno actual. Al mismo tiempo, para el presidente López Obrador son claras las dificultades de tener a los empresarios como enemigos políticos (él mismo lo sufrió durante la elección presidencial de 2006) y aún no queda del todo claro cómo será la relación entre gobierno y sector privado en lo que resta del sexenio.

Las prácticas políticas de los grupos empresariales están relacionadas con los cambios del sistema político nacional. La llamada “apertura democrática” de finales del siglo XX y principios del XXI complejizó las relaciones de los empresarios con el gobierno mexicano. Así, en un contexto de “apertura democrática”, los empresarios afianzaron su papel como actores políticos decididamente activos. Hoy en día el sector privado es uno de los grupos con mayor poder en la definición de políticas en México. Para finalizar, considero que esto debe ser una enseñanza para los sectores de izquierda: los empresarios, a pesar de sus diferencias, han sabido unirse para defender sus intereses. Las izquierdas también podríamos organizarnos en la búsqueda de objetivos específicos. En parte gracias a su organización, en la actualidad el sector privado es un grupo de poder determinante. Nosotros también podríamos serlo.

Bibliografía

Alba Vega, Carlos (2001). “Los empresarios en la transición política mexicana”, en Reynaldo Yunuen Ortega Ruiz (ed.), *Caminos a la Democracia*. México: El Colegio de México, pp. 209-239.

Alba Vega, Carlos (2006). “Los empresarios y la democracia en México”, *Foro Internacional*, Vol. XLVI, núm. 183, pp. 122-149.

Arriola Woog, Carlos (1988). *Los empresarios y el Estado, 1979-1982*. México: UNAM/Porrúa.

Flores, Anselmo (2003). "Los empresarios y la transición a la democracia: los casos de México y España", *Revista Mexicana de Sociología*, año 65, num.3, pp. 497-522.

Flores, Anselmo (2006). "¡Habemus presidente! El conflicto post-electoral en México", *La Chronique des Amériques*, núm. 30.

Hernández, Rogelio (1990). "La conducta empresarial en el gobierno de Miguel de la Madrid", *Foro Internacional*, vol. 30, núm. 4, pp. 736-764.

Labastida, Julio y Miguel López Leyva (2004). "México: una transición prolongada", *Revista Mexicana de Sociología*, año 66, núm. 4, pp. 479-806.

Luna, Matilde (1990). *El Estado, los empresarios y las transformaciones del régimen político administrativo: México, 1970-1987*. México: UNAM.

Puga, Cristina (2012). "Cambios en la acción política y social del empresariado mexicano", en José Ramón Cossío Díaz y Enrique Florescano (coords.), *La perspectiva mexicana en el siglo XXI*. México: Fondo de Cultura Económica/ Conaculta/ Universidad Veracruzana, pp.155-195.

Quintana, Luis (2016). "Crisis neoliberal y reforma laboral en México", *Cuadernos del CENDES*, vol. 33, núm. 93, pp. 113-123.

Schedler, Andreas (2008), "La movilización de la desconfianza en las elecciones presidenciales del 2006", en Alan Knight *et al.* (eds.), *La conflictiva y nunca acabada construcción de la democracia deseada: México en perspectiva histórica y comparada*. Ciudad de México: Porrúa/ Tecnológico de Monterrey, pp. 31-63.

Sosa, Georgina (2010). "El Consejo de la Comunicación: 'Portavoz' de los empresarios en la democracia mexicana", *Andamios*, vol. 7, núm. 14, pp. 69-99.

Sosa, Guadalupe y Miguel López Leyva (2013), "Los empresarios y los candidatos presidenciales en el proceso electoral de 2012: estrategias de interlocución e influencia", en Héctor Zamitiz Gamboa (coord.), *Contienda electoral y rendimiento democrático en México 2012*. México: UNAM, pp. 167-196.

Valdés, Francisco (1997). *Autonomía y legitimidad. los empresarios, la política y el estado en México*. México: UNAM/ Siglo XXI editores.